
0040-S-04

(S.-40/04)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Modifícase el artículo 13 del Código Penal, que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 13: El condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido veinte años de condena, el condenado a reclusión temporal o a prisión por más de tres años que hubiere cumplido los dos tercios de su condena y el condenado a reclusión o prisión, por tres años o menos, que por lo menos hubiese cumplido un año de reclusión u ocho meses de prisión, observando con regularidad los reglamentos carcelarios, podrá obtener la liberación por resolución judicial previo informe de la dirección del establecimiento bajo las siguientes condiciones:

1. Residir en el lugar que determine el auto de soltura.
2. Observar las reglas de inspección que fije el mismo auto, especialmente la obligación de abstenerse de bebidas alcohólicas.
3. Adoptar, en el plazo que al auto determine, oficio, arte, industria o profesión, si no tuviere medios propios de subsistencia.
4. No cometer nuevos delitos.
5. Someterse al cuidado de un patronato indicado por las autoridades competentes.
6. Someterse a tratamiento psicopedagógico previo informe que acredite su necesidad y eficacia.

Estas condiciones regirán hasta el vencimiento del término de las penas temporales, y en las perpetuas hasta cinco años más a contar desde el día de la libertad condicional.

No procederá el beneficio contemplado en el presente artículo cuando se trate de condenados por delitos contemplados en los artículos 119, 120.

Art 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ricardo A. Bussi – Delia Pinchetti de Sierra Morales.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Lamentablemente en los últimos días los distintos medios periodísticos han ido recogiendo una sucesión de hechos delictivos, atentatorios a la integridad sexual de las víctimas y en algunos casos seguidos de muerte de la persona ofendida.

Esto, que no es nuevo, encuentra sus razones más profundas, entre otras cosas, en un déficit educacional que hoy a todas luces es imposible de tapar.

Sin embargo y más allá de las políticas estructurales, que pueden y deben llevarse adelante para ir morigerando estas actitudes disvaliosas y antisociales, las circunstancias exigen la búsqueda de remedios que, más allá de combatir las causas eficientes de estas acciones, lleven a sus posibles autores a evaluar la conveniencia de sus conductas sobre la base de sus posibles consecuencias.

En ese orden de ideas, vemos que la ley 25.087 sancionada el 14 de abril de 1999, modificando el título III del libro segundo del Código Penal, “Delitos contra la integridad sexual”, marca un claro cambio de la política legislativa en cuanto a la tipificación de las conductas descritas, receptando el sentir actual de la sociedad.

Igual tendencia encontramos en varios proyectos legislativos según los cuales se propugna la creación de un registro especial donde figuren todos aquellos condenados por delitos contra la integridad sexual.

Todas estas iniciativas tienden a rescatar la necesidad de la comunidad de contar con mecanismos de defensa que permitan en un aspecto adoptar actitudes preventivas de protección y, en otro, frente al hecho consumado, tratar de limitar las posibilidades de que se repitan.

Resulta ya un hecho comprobado la tendencia hacia la reiteración delictiva que evidencian los ofensores sexuales, y así numerosas opiniones profesionales indican que existe una altísima posibilidad de que, por ejemplo, aquellos que cometen delitos sexuales se conviertan en reincidentes.

En esta problemática, la preocupación de las autoridades debe estar dirigida a interrumpir el ciclo que conlleva el abuso sexual, ciclo en que la reincidencia es inevitable por la superficial comprensión de las exigencias del medio que tienen estos individuos, a quienes, en muchos países adelantados, se los denomina predadores con una muy escasa tolerancia a la frustración; poseen una manifestada incapacidad de manejar sus impulsos instintivos, lo que los conduce a una incontenible compulsión a la repetición. Es así que reinciden en un 95% de los casos, según publicaciones recientes. Con sólo recordar la estadística emanada de la Dirección de Política Criminal, que indica que en el 2002 hubo 3.036 violaciones registradas en el país, además de otros 5.772 delitos contra la integridad sexual, concluimos que el problema es verdaderamente serio como para no tomar medidas urgentes y de aplicación práctica inmediata.

Por ello, con esta reforma del artículo 13 del Código Penal que estoy proponiendo, tiendo a ver el problema, una vez acaecido, desde un doble punto de vista; por un lado, mediante una actitud de tipo terapéutico, que permita recuperar en lo posible a los individuos de su patología, de ahí la redacción de un nuevo inciso, el 6; y en otro aspecto, limitando las posibilidades de que, por las especiales características psicológicas de quienes incurrir en este tipo de delito, puedan acceder al instituto de la libertad condicional, en la inteligencia de que con ello recuperan su libertad anticipadamente.

Por los motivos expuestos solicito a este cuerpo la aprobación del presente proyecto.

Ricardo A. Bussi – Delia Pinchetti de Sierra Morales.

–A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.